

ellos, O. Solís, fue también el que en agosto había presentado el proyecto de ley llamado C.U.L.P.A. (Cortar Únicamente Lo Producido Ahora), que pretende establecer casi una veda sobre el bosque natural del país, mas el ministro de Recursos Naturales (es decir, el Poder Ejecutivo), junto con todos los madereros y los industrializadores del producto, está opuesto a él.

El gobierno merece reconocimiento pero no lisonjas por las soluciones relativas a ciertos sencillos problemas: replanteamiento de obras en el complejo turístico Papagayo, reconsideración de algunos aspectos del convenio con Ston Forestal, protección del bosque La Mula, anuncio de derogatoria de permisos de explotación minera en ríos... Y es digno de disculpas por otros problemas irresueltos de difícil solución -disculpas porque no es más que un gobierno tercermundista a merced de burgueses mayoritariamente adocenados y

ruines-: crecimiento incontrolado de la industria turística predatora, ubicuidad acentuada de los desechos sólidos, expansión del dengue y otras plagas, caos del transporte automotor... Como puede apreciarse, el gobierno ha hecho algo en lo puntual y menor -o sea, en lo que no es amenazante para el adorado crecimiento económico nacional-, pero no en lo general y mayor. Y entre los temas puntuales y menores escoge aquellos en los que el movimiento ambientalista (Defensoría de los Habitantes incluida) hace presión.

Sea como sea, el éxito del do de pecho dado por Figueres con su machacón y tosco discurso de desarrollo sostenible ha sido tal que entre la élite política socialdemócrata ya surgió quien le está escamoteando su mérito táctico-político. El ex presidente Arias, simplificando conceptos y hechos y haciendo caso omiso de voluminosas diferencias, se lo atribuye a sí mismo y al precedente gobierno del finado Oduber (LN,22-10-94:15A). Allá ellos.♣

El discurso de la sostenibilidad y la persistencia de los conflictos ambientales

-Análisis del acontecer ambiental nacional en octubre-

Emilio Vargas Mena

Las manifestaciones más relevantes de la relación sociedad-naturaleza en el mes de octubre correspondieron a tres conjuntos de acontecimientos. El primero de ellos refiere muy claramente a la continuidad de la proyección internacional costarricense en el mundo de la llamada "sostenibilidad". El segundo se trata de los hechos relacionados con nuestras tres principales actividades de exportación: la producción bananera, la cafetalera y la turística. Y, finalmente, las noticias siguieron siendo copiosas en torno a los problemas ambientales que afectan más directamente la vida cotidiana de los costarricenses.

Las páginas de prensa en los primeros días del mes hacían todavía eco del inusual acuerdo bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos para compensar contaminación atmosférica del norte con reforestación en el sur, como medio para enfrentar las tendencias del cambio climático global. Las autoridades gubernamentales sugirieron que los beneficios directos en Costa Rica serían para

Parques Nacionales (pago de expropiaciones), para los ganaderos que ahora quisieran reforestar y también para grupos de campesinos reforestadores. La posible pugna por los recursos que genere ese acuerdo, si es que fueran cuantiosos -no hubo estimaciones públicas del monto-, se resolvería en favor de las fuerzas políticas hegemónicas.

Cuatro reuniones internacionales realizadas en octubre continuaron dando proyección internacional a la retórica de la administración Figueres en torno a su "modelo de desarrollo en alianza con la naturaleza". La Fundación Rockefeller trajo a Costa Rica 150 delegados de 8 gobiernos para que discutieran aquí, con funcionarios gubernamentales, sobre políticas de sostenibilidad. Además, los Consejos Nacionales de Desarrollo Sostenible de gobiernos latinoamericanos participaron durante dos días en una reunión interamericana realizada en nuestro país con el mismo propósito.

Los presidentes centroamericanos se reunieron en Managua para firmar la "Alianza para el Desa-

rollo Sostenible". El énfasis ecológico en los acuerdos de esta reunión refleja una conceptualización limitada o ambigua de la sostenibilidad. Los acuerdos refieren a ordenamiento territorial, ratificación de la Convención Mundial de Biodiversidad, ambientalizar los currícula, invertir en fuentes renovables de energía, estimular el control biológico, "evitar excesos" en la aplicación de agroquímicos, incrementar el reciclaje, crear premios y castigos fiscales relacionados con la contaminación e impulsar el ecoturismo. Ese énfasis ecológico fue tácitamente cuestionado por Albert Gore cuando señaló que la nueva Alianza parece avanzar hacia objetivos comunes compartidos por Estados Unidos: *la lucha contra la pobreza* y un nuevo modelo de *seguridad regional*.

Lo que fue excluido de la cumbre ecológica se discutió pocos días después en Honduras, en la Conferencia Internacional sobre Paz y Desarrollo. El compromiso asumido por los presidentes de "perfeccionar y profundizar los procesos de participación ciudadana en la descentralización y desconcentración de los servicios del Estado, respetando la diversidad cultural y étnica en el istmo y los derechos humanos fundamentales" (LN,26-10-94:23A) refleja claramente dimensiones claves de la sostenibilidad excluidas del texto de acuerdos de la Alianza.

Estos acontecimientos políticos de proyección internacional difunden el discurso de la sostenibilidad del gobierno costarricense y lo comprometen en términos de la coherencia esperada en sus acciones políticas internas. A finales del mes, el Congreso Internacional de Economía Ecológica organizado por la Maestría en Política Económica de la UNA se sumó estratégicamente a estos hechos, pero no solo desde una perspectiva inevitablemente política sino también deseablemente científica. En este último sentido, habrá que valorar en los próximos meses si el Congreso reflejó o no un aporte sustantivo en avances conceptuales, teóricos o metodológicos de la ciencia económica aplicada a la sostenibilidad y si en alguna medida se ha logrado algún paso importante hacia una *teoría* alternativa del desarrollo.

En términos de nuestras principales actividades de exportación algunos hechos importantes dieron continuidad a las tendencias que hemos venido analizando en los anteriores balances. En primer lugar, la expansión bananera continúa detenida,

con síntomas de crisis sectorial y sin debate alguno sobre su impacto ambiental. El acuerdo que Costa Rica, Venezuela, Colombia y Nicaragua habían firmado a principios del año con la Unión Europea y que tenía que regir a partir del primero de octubre, fue incumplido por Europa, ocasionando pérdidas en los productores debido a las falsas expectativas que se habían creado. El conflicto se agudizó cuando la transnacional Chiquita Brands denunció la situación al Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos para que éste investigue e implemente sanciones comerciales contra los países responsables de la violación de los tratados de libre comercio. La denuncia fue acogida y la investigación se ha iniciado ya en relación a la Unión Europea y al acuerdo de cuotas que promueve entre los gobiernos latino-americanos.

En la producción cafetalera los sectores organizados demostraron su poder político al lograr que su propuesta sobre impuestos fuera aceptada por el gobierno. En el acuerdo alcanzado los cafetaleros pagarán un 15% de impuesto sobre la renta, trece puntos menos que el anterior impuesto ad-valorem, pero en una coyuntura en que el precio internacional ha alcanzado niveles muy pronunciados de recuperación. Cuando ya la cosecha de café empieza a recogerse en el Valle Central, la prensa no informa sobre los aspectos de contaminación relativos a esta agroindustria ni tampoco sobre el destino que tendrán los recursos que ahora los cafetaleros no tendrán que pagar en la forma de impuestos.

En el sector turístico el conflicto principal más reciente ha sido también de carácter económico. La Cámara Nacional de Turismo encontró en su ex-presidente Carlos Roesch -actual Ministro de Turismo- un aliado clave en sus propósitos por revertir decisiones gubernamentales que perjudican sus intereses y puso también en evidencia la descoordinación existente en el Consejo de Gobierno. Mientras que el Ministro Castro y el Presidente habían firmado el decreto que aumentaba la tarifa de ingreso en parques nacionales a US\$15 para extranjeros residentes, el Ministro Roesch y CANATUR hicieron revertir la decisión para responder positivamente a los intereses de las agencias turísticas y de los mismos empresarios hoteleros. Pese a la clara argumentación del Ministro Castro (LN,11-10-94:8A), CANATUR y el

ICT negociaron a su favor, a cambio de una transferencia de 68 millones de colones del ICT a MIRENEM. La decisión final de vender entradas en San José a \$10 dólares y a \$15 en los Parques, discrimina contra los visitantes que viajan sin utilizar los servicios de agencias de viajes y afecta claramente los intereses de algunos proyectos comunitarios que venden servicios a ese tipo de visitante independiente (p.e. Barrio Cubillos, Cabuya y Mal País).

El sector turístico también ha reaccionado fuertemente a la estrategia gubernamental de cubrir el déficit fiscal con nuevos impuestos. La CANATUR, con el apoyo del Ministro Roesch (LR,11-10-94:6A), anunció que se oponen al incremento del impuesto de ventas, al del 1% sobre los activos y a la eliminación del "escudo fiscal" que actualmente les favorece. Jesús Castro, el Vice-Presidente de CANATUR amenazó con que los empresarios turísticos tendrían que entregar las llaves de sus negocios a los bancos si se aprueba el paquete tributario (LR,11-10-94:6A).

Esta reversión de decisiones gubernamentales y la aceptación de propuestas por parte de los sectores exportadores ubica en su verdadera dimensión el carácter y la naturaleza de las fuerzas políticas ligadas a esos sectores. La Administración Figueres tuvo que modificar su táctica política y se mostró en el mes de octubre más orientada a la concertación de intereses y a ceder en sus pretensiones hegemónicas. El ejemplo más claro fue la decisión de aceptar el PAE III de la Administración Calderón.

Por último, existe un conjunto de hechos que se sitúan mucho más cerca de la vida cotidiana de los costarricenses que la retórica oficial y las pugnas de los exportadores. El dengue continúa su marcha, seguido, muy atrás, por las máquinas fumigadoras del Ministerio de Salud y las vagones recolectoras de la basura "no convencional". Santa Ana, Quepos, San José de Alajuela y Guanacaste se vieron afectados por fuertes brotes epidémicos durante octubre. Solo en Guanacaste se reportaron 733 casos en el mes de setiembre y se aplicó la limpieza en unas 18 mil viviendas el mes siguiente, sin informarse dónde se colocaron los desechos.

Río Azul y la basura josefina siguen ocupando

espacio en la prensa. El gobierno volvió a incumplir otro parte del acuerdo y no realizó a tiempo las obras que los vecinos habían exigido para prevenir desbordamientos del Río Azul cuando entraran las lluvias. El río se desbordó afectando directamente a 15 familias y amenazando a otras 120 (LN,11-10-94:20A). Al día siguiente los vecinos como protesta impidieron de nuevo el ingreso de la basura. El cierre duró solamente un día sin que trascendiera ninguna solución.

La opción de producción de energía eléctrica por incineración fue cuestionada por químicos del ICE cuando anunciaron que las pruebas preliminares con 63 muestras de basura arrojaron un porcentaje promedio de humedad del 68%, lo cual excede el porcentaje recomendado del 50%. Este hecho anticipa que la solución no estará todavía clara para el 15 de noviembre, como anunció Víctor Ojeda, Ministro designado, al menos que se decida utilizar combustibles fósiles para hacer posible la incineración, incrementando el costo ambiental del proyecto.

Al dengue y la basura se sumaron otros hechos que amenazan a las poblaciones rurales: el deslizamiento del cerro Lajas en Santa Ana y la sequía en Guanacaste. Esta última adquiere especial significado en el contexto del desarrollo turístico, la amenaza de incendios forestales, la pérdida de cosechas y problemas de abastecimiento de agua potable a las poblaciones.

En síntesis, en octubre el discurso oficial del desarrollo sostenible continuó su proyección en el contexto internacional, las principales actividades de exportación intentaron resolver sus problemas económicos sin mención alguna a su impacto ambiental y una parte muy importante de la población costarricense siguió siendo afectada por las consecuencias de un manejo inapropiado de su relación con la naturaleza. En este marco, el hecho político nacional de mayor interés ambiental, podría haber sido la recomendación gubernamental inicial de vetar Punta Estrella como el sitio de la astilladora y muelle de la Ston Forestal en el Pacífico Sur de Costa Rica. Veremos en los próximos meses si esa recomendación resiste la presión de las fuerzas políticas interesadas, presión que no parece estar resistiendo el controversial proyecto CULPA.♣